

[Normativa](#)

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia 891/2013 de 26 Nov. 2013, Rec. 4177/2013

Ponente: Ramírez Sineiro, José Manuel.

Nº de Sentencia: 891/2013

Nº de Recurso: 4177/2013

Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.2

A CORUÑA

SENTENCIA: 00891/2013

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE GALICIA.

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

SECCION SEGUNDA.

AUTOS: RECURSO DE APELACION NÚM. 004177/13 - SALA DE LO CONTENCIOSO-ADVO. DEL T.S.J. DE GALICIA.

PROCEDIMIENTO DE ORIGEN: P.O. NÚM. 0057/11 - JUZGADO CONTENCIOSO-ADVO. NÚM. 3 DE A CORUÑA.

PROMOVENTE: "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." .

Representada por: Sr. Procurador DON GONZALO LOUSA GAYOSO.

Defendida por: Sr. Letrado DON JOSE ANTONIO GARCIA-TREVIJANO GARNICA.

ADMINISTRACION DEMANDADA: MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS DE LA SIERRA DEL BARBANZA.

Representada y defendida por: Sr. Letrado-adjunto de la Asesoría Jurídica de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña DON MANUEL PEREZ QUEIRO.

SENTENCIA

En A Coruña, a 26 de Noviembre del 2013.

Las presentes actuaciones -a la sazón constitutivas de aquellos ***Autos núm. 004177/13*** de

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Galicia-, fueron promovidas por aquella Razón empresarial denominada " **FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.** " - respectivamente representada y defendida por el Sr. Procurador del Ilustre Colegio de Procuradores de esta Capital DON GONZALO LOUSA GAYOSO y por el Sr. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid DON JOSE ANTONIO GARCIA-TREVIJANO GARNICA-, contra la **MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS DE LA SIERRA DEL BARBANZA** -a su vez representada y defendida por el Sr. Letrado-adjunto de la Asesoría Jurídica de la Excm. Diputación Provincial de A Coruña DON MANUEL PEREZ QUEIRO-, a los presentes efectos apelatorios "ad quem" interesados, habiendo en cualquier caso quedado ya los autos vistos para Sentencia según se colige de su examen, de forma que examinado su contenido por la Sección Segunda de dicha misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Galicia integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados al efecto ahora referenciados

DON JOSE ANTONIO MENDEZ BARRERA (Pte.)

DON JOSE MARIA ARROJO MARTINEZ

DON JOSE MANUEL RAMIREZ SINEIRO (Ponente), con arreglo a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- La Representación legal de aquella Razón empresarial denominada "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." interpuso su recurso de apelación contra la Sentencia de fecha 7 de Enero del 2013, dictada por aquel Ilmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de A Coruña y por la que se le desestimó su recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de fecha 3 de Noviembre del 2010 -y no 22 de Diciembre de dicho año como erróneamente se referenció en dicho fallo "a quo" adoptado-, dictada por la Junta de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Sierra del Barbanza y por la que se le desestimó su solicitud de compensación económica a fin del restablecimiento del equilibrio económico de aquel contrato administrativo relativo tanto a la ejecución de la obra del Complejo medioambiental de residuos sólidos urbanos, sito en la ladera del Monte Valiña, en la carretera 543, en Lousame (A Coruña), como a la gestión en régimen de concesión del servicio público de gestión de residuos sólidos urbanos y asimilados, suscrito en fecha 21 de Agosto del 2001 en virtud de precedente adjudicación al respecto otorgada mediante Resolución de fecha 30 de Marzo del 2000, adoptada por igual máximo Organo decisorio de dicho mencionado Ente institucional-supramunicipal.

2.- Dicha Representación legal de aquella Entidad empresarial promovente dedujo pues aquella impugnatoria apelación al respecto que ahora corre unida a las presentes actuaciones, otorgándosele ulterior trámite alegatorio-contradictorio al respecto a aquella otra Representación legal de dicho mencionado Ente institucional-local que se opuso de contrario y del todo punto a su estimación, quedando declarados conclusos los autos y vistos para sentencia.

3.- Se considera a sus efectos probado que mediante aquella Sentencia de fecha 7 de Enero del 2013, dictada por aquel Ilmo. Sr. Magistrado- Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 aquí sito, se le desestimó a la Representación legal de aquella Razón empresarial demandada "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." su recurso contencioso-administrativo contra aquella Resolución de fecha 3 de Noviembre del 2010 -y no 22 de Diciembre de dicho año como erróneamente se referenció en dicho fallo "a quo" adoptado-, dictada por la Junta de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Sierra del Barbanza y por la que se le desestimó su solicitud de compensación económica a fin del restablecimiento del equilibrio económico de aquel contrato administrativo relativo tanto a la ejecución de la obra del Complejo medioambiental de residuos sólidos urbanos, sito en la ladera del Monte Valiña, en la carretera 543, en Lousame (A Coruña), como a la gestión en régimen de concesión del servicio público de gestión de residuos sólidos urbanos y asimilados, suscrito en fecha 21 de Agosto del 2001 en virtud de precedente adjudicación al respecto otorgada mediante Resolución de fecha 30 de Marzo del 2000, adoptada por igual

máximo Órgano decisorio de dicho mencionado Ente institucional-supramunicipal.

4.- Resulta asimismo probado -según también se constata del respectivo contenido de las cláusulas décimotercera y decimoséptima de aquel mencionado Contrato ahora obrantes al folio 5 del Documento 1 del Expediente de autos-, tanto que "en lo relativo a..., licencias, permisos y autorizaciones a cargo del contratista se estará a lo dispuesto en el Art. 26 del Pliego de condiciones económico-administrativas", como que dicha Entidad empresarial "se obliga a la correcta gestión, en régimen de concesión administrativa -durante un plazo de VENTE (20) AÑOS según también estipula aquella otra cláusula vigésimoprimera-, del servicio público de gestión de residuos sólidos urbanos y asimilables" de dicha Mancomunidad..., "con arreglo a los pliegos de condiciones económico-administrativas y técnicas..., así como a las cláusulas especificadas en este Contrato".

5.- Se estima igualmente probado -conforme se colige de los Arts. 26,2 y 9 y 43,17 y 18 del Pliego de condiciones económico-administrativas y según consta a los folios 27; 38 y vto. y 39 de dicha mencionada documental obrante en el Expediente-, que "el adjudicatario se hará responsable de obtener y pagar las licencias, permisos y autorizaciones que, en su caso, sean precisos para la realización de todas las actividades objeto del contrato...", así como que "serán obligaciones del concesionario, además de las previstas con carácter general en las leyes y reglamentos aplicables..., obtener las autorizaciones necesarias..., para la explotación de los servicios", amén de "cumplir las Disposiciones legales y reglamentarias vigentes...".

6.- Está pues probado -también por lo que ahora especialmente atañe-, que cuando se suscribió aquel mencionado Contrato de mixto carácter antes referenciado en aquella pasada fecha 21 de Agosto del 2001 por aquellas mencionadas Contrapartes pública y privada ya se había promulgado -aunque todavía se encontraba entonces pendiente de trasposición a nuestro Derecho interno-, aquella Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de Septiembre de 1996 (LA LEY 5940/1996) (DOCE núm. L 257, de 10 de Octubre de 1996), relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, sin perjuicio de que fuese a la postre su contenido efectivamente incorporado a nuestro Ordenamiento jurídico mediante aquella Ley núm. 16/02, de 1 de Julio (LA LEY 1041/2002), de prevención y control integrados de la contaminación.

7.- En cualquier caso -también por lo que ahora especialmente atañe-, aquella mencionada Entidad empresarial promovente y apelante denominada "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." ha omitido aportar documentación acreditativa alguna de las efectivas cuentas de explotación -con detallada pormenorización de ingresos y gastos-, amén de su comparativa y sucesiva evolución que acredite el efectivo índice de disminución de su efectivo beneficio y, en particular, en lo que se refiere a aquel servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos y asimilables y a su depósito primero y tratamiento o eliminación después.

8.- Se dictó pues "a quo" aquel precedente Decreto de fecha 26 de Octubre del 2011 por el que se estableció la cuantía de la presente "litis" como indeterminada, habiéndose desde luego procedido a su apelatoria deliberación en aquella pasada fecha 21 de Noviembre del 2013 y tramitándose además estas actuaciones con arreglo a las correspondientes prescripciones legales, de modo que con arreglo a los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.- Se aceptan pues los extremos fácticos y razonamientos jurídicos sentados en aquel fallo de instancia "a quo" recaído y a la sazón impugnado que no contradigan la presente Sentencia ahora "ad quem" dictada, debiendo de significarse que el núcleo controvertido radica precisamente en torno a la valoración de la prueba documental de autos y, en particular, acerca tanto de si cabe apreciar o no alteración sustancial de las condiciones de explotación concesional o algún pormenor susceptible de generar la rotura del equilibrio financiero de aquel contrato mixto de autos -es decir, de obra y concesión de aquel servicio

público de recogida y gestión de residuos sólidos urbanos y asimilables-, suscrito en fecha 21 de Agosto del 2001 entre aquel otrora Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de dicha Mancomunidad municipal y el Representante legal de aquella mencionada Razón empresarial.

2.- Resulta pues aplicable aquella pauta jurisprudencial apuntada por un lado por la Sentencia de fecha 28 de Noviembre de 1991, dictada por la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, al sentar que *"la actividad probatoria tiende a lograr que el Juzgador se convenza de la certeza de los hechos. La prueba es valorada en su conjunto para estimar en conciencia lo que crea probado; tras esa valoración recta y en conciencia del conjunto de la prueba se fijan los hechos probados que es la respuesta segura que se da en los planteamientos fácticos"*; por otro, por aquella otra Sentencia de fecha 13 de Febrero de 1990, dictada por igual máximo Órgano jurisdiccional contencioso-administrativo de carácter colegiado en cuanto señala también que *"la presunción de legalidad del acto administrativo desplaza sobre el administrado la carga de accionar para evitar la producción de la figura del acto consentido, pero afecta a la carga de la prueba que ha de ajustarse a las reglas generales"*, sin perjuicio de que también venga a sostener que las reglas generales de valoración de la prueba al efecto desde luego aplicables *"indican que cada Parte soporta la carga de probar los hechos que integran el supuesto de la Norma cuyas consecuencias jurídicas invoca a su favor"* -al no ser en su día ésta la solución elaborada por inducción sobre la base del Art. 1214 del Código Civil (LA LEY 1/1889) y cohonestarse actualmente dicho pormenor con el Art. 217 de aquella Ley núm. 1/00, de 7 de Enero (LA LEY 58/2000), de Enjuiciamiento Civil, por demás aplicable en la presente vía contenciosa de conformidad con el tenor tanto del Art. 60,4 y de la Disposición Final primera de aquella otra Ley núm. 29/98, de 13 de Julio (LA LEY 2689/1998), reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa-, de forma que -señala aquella Sentencia de fecha 27 de octubre de 1994 de igual suprema Instancia judicial contencioso-administrativa-, "respecto a la prueba debemos tener en cuenta tanto que en el proceso contencioso-administrativo la misma se rige por los principios que la regulan en el proceso civil como que su valoración en conjunto junto con el contenido del Expediente administrativo constituye la base de la convicción del Juzgado".

3.- Pese a que el Art. 127,2-2º y 3º de aquel añejo Decreto de fecha 17 de Junio de 1955, aprobatorio del todavía vigente Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (LA LEY 18/1955), prevé -entre otros extremos, que "la Corporación concedente -aquí aquel Ente institucional supramunicipal-, deberá mantener el equilibrio financiero de la concesión para lo cual compensará económicamente al concesionario por razón de las modificaciones que le ordenare introducir en el servicio y que incrementaren los costes o disminuyeren la retribución y revisará las tarifas y subvención cuando, aún sin mediar modificaciones en el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión", sin embargo no se ha acreditado "ex-parte" ni la ruptura del equilibrio financiero de dicha concesión ni tampoco la existencia de perjuicios inherentes a circunstancias imprevistas o por completo inesperadas.

4.- Corresponde pues la prueba de la existencia de las obligaciones al que reclame su cumplimiento y la de su extinción al que se oponga, siendo en suma patente -por lo que ahora importa y como desde luego se sentó ya en instancia-, que en el marco de la contratación pública no sólo rige el principio de riesgo y ventura del contratista sino el de la libertad de pactos y su corolario consistente en la vinculación de las Contrapartes al tenor del clausulado convencionalmente pactado y a las naturales consecuencias inherentes al mismo, de modo que resulta palmario que corresponde aportar a dicha Razón empresarial promovente prueba fehaciente o, al menos, de suficiente entidad que auspicie de algún modo su solicitud y sin que, sin embargo, lo haya hecho, sin que aporte siquiera patrones comparativos entre el previsible estudio de viabilidad inicial de aquel negocio constructivo-concesional que en su caso hubiese aportado a aquel proceso concursal-competitivo del que resultó adjudicataria y la realidad ulterior y actual del mismo.

5.- En cualquier caso, la clave decisorio-jurisdiccional de la presente controversia apelatoria -como sin duda lo fue en aquella previa e inicial sede jurisdiccional de instancia-, reside en que "ex-parte" ni siquiera se ha aportado pericial económico-contable alguna que acredite o, al menos, indiciariamente referencie con un principio de prueba aquel déficit de explotación e inversiones de contrario alegado y además que dicho pormenor no sólo resultase imprevisible sino ajeno a los deberes de normal previsibilidad empresarial al suscribir aquel contrato concesional de aquel servicio público de autos.

6.- Así, reiterado tenor jurisprudencial plasmado -entre otras-, por aquella Sentencia de fecha 2 de Abril del 2008, dictada por igual Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, señaló que *"requisito esencial -para la posible aplicación de la cláusula implícita "rebus sic stantibus"-, es el de la imprevisibilidad del acaecimiento que se invoca como causante de la ruptura del equilibrio contractual..., ya que si la oferta y el porcentaje de tarifas especiales lo realizó libremente la Empresa y erró en las apreciaciones que efectuó, a ella exclusivamente es imputable esa circunstancia. Que esa errónea apreciación -subraya nuestro más alto Tribunal jurisdiccional contencioso-administrativo-, no es un riesgo imprevisible es obvio. Pero, sobre todo -y esto es lo más importante-, que los ingresos por esa circunstancia sean menores que los esperados no rompe el equilibrio financiero..., tanto más cuanto las tarifas se revisan -o pueden revisarse-, del modo previsto en el Pliego..., como ya quedó expuesto en su momento"* e inclusive se sentó -por lo que ahora atañe-, en dicha precedente e inicial Instancia contenciosa y no se ha desmentido de contrario.

7.- Así, la doctrina del "riesgo imprevisible razonable" como causa de indemnización -apunta reiterado tenor jurisprudencial plasmado, entre otras, por aquellas sendas y sucesivas Sentencias de fechas 25 de Abril y 4 de Junio del 2008, dictadas por igual máxima Instancia jurisdiccional contencioso-administrativa-, *"contempla sucesos que sobrevienen con carácter extraordinario que alteran de forma muy notable el equilibrio económico y contractual existente en el momento del contrato pues sobrepasan los límites razonables de aleatoriedad que comporta toda licitación. Implica, por tanto -conforme a los Arts. 3,2 y 7, 1 del Código Civil -, aplicar los principios de equidad y de buena fe por la aparición de un riesgo anormal que cercena el principio del equilibrio económico-financiero entre las Partes, pero sin atacar frontalmente el principio de riesgo y ventura esencial en la contratación pública"*, de modo que *"habrá de atenderse al caso concreto ponderando las circunstancias concurrentes"*.

8.- Además -reitera inclusive dicho mismo tenor jurisprudencial-, *"debe atenderse a las circunstancias de cada contrato en discusión para concluir si se ha alterado o no de modo irrazonable ese equilibrio contractual a que más arriba hemos hecho mención. La incidencia del incremento ha de examinarse sobre la globalidad del contrato pues un determinado incremento puede tener mayor o menor relevancia en función de la mayor o menor importancia económica del contrato y de los distintos aspectos contemplados en el mismo. En el momento actual - puntualizó pues dicha mencionada Sentencia de fecha 4 de Junio del 2008 adoptada por dicha Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -, no hay disposición legal alguna que establezca umbrales fijos para la entrada en juego del principio del riesgo y ventura"*, sin perjuicio de que *"cifras de incremento de DOS CON CINCUENTA Y SIETE (2,57%) POR CIEN en el presupuesto inicial o del TRES CON CATORCE (3,14%) POR CIEN en el adicional con revisión de precios se encuentran dentro de los márgenes razonables con relación al beneficio industrial... Es cierto que en tal supuesto el beneficio del contratista es menor del esperado, mas ello encaja en la doctrina del riesgo y ventura sin alterar frontalmente el equilibrio económico financiero que haría entrar en juego la doctrina del riesgo imprevisible"*.

9.- La inexistencia pues de prueba "ex-parte" que acredite de forma palmaria -y no mediante una mera y sesgada alegación documental exclusivamente referida a los gastos, pero sin alusión alguna a los ingresos y al examen comparativo-sucesivo de la evolución aún

decreciente de beneficios-, aquella ruptura del equilibrio financiero determina que se haya de desestimar la apelación suscitada y se deba de confirmar aquel fallo de instancia que desestimó aquella impugnación contenciosa "ex-parte" suscitada por dicha Razón empresarial contra la denegación por dicho Organismo institucional-local de su solicitud indemnizatoria al respecto, sin perjuicio de que se deba abundar ahora asimismo "ad quem" en la inexistencia de riesgo imprevisible sobrevenido como consecuencia de "factum principis" alguno.

10.- Así, " *la invocación del principio jurídico factum principis* " -apunta aquella otra Sentencia de fecha 19 de Mayo del 2007 dictada por dicha Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -, supone una " *actuación de cualquier Administración o Ente público que determina de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión y deriva en el reconocimiento del derecho del concesionario a que se restablezca el equilibrio económico del contrato*", englobando todos " *aquellos supuestos en que la adopción por la Administración de medidas de carácter económico o social -acordadas al margen del contrato y que tienen una repercusión negativa en su ejecución por hacerlo más oneroso para una de las Partes, causando perjuicios concretos para el contratista o el concesionario-, determina el reconocimiento judicial de la obligación de la Administración, con base a razones de equidad, con independencia de la aplicación del procedimiento contractual de revisión de precios o tarifas, de mantener indemne el equilibrio de las prestaciones económicas, compensando o indemnizando por los daños y perjuicios ocasionados* ".

11.- Sin embargo, resulta también obvio que semejantes medidas -que pueden tener inclusive cobertura normativa explícita-, deben ser sorpresivas por inesperadas e imprevisibles y, por ende, ser posteriores a la suscripción de aquel contrato de que se trate y sin que -por lo que al presente caso atañe-, tampoco se produzca aquí semejante pormenor en cuanto si bien aquella Ley núm. 16/02, de 1 de Julio (LA LEY 1041/2002), de prevención y control integrados de la contaminación, estuvo vigente con posterioridad a la suscripción de aquel contrato de mixto carácter suscrito por aquellas sendas Contrapartes pública y privada, el contenido normativo allí establecido en modo alguno podía ser desconocido para aquella mencionada Razón empresarial, en la medida en que era una trasposición del contenido de aquella Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de Septiembre de 1996 (LA LEY 5940/1996) (DOCE núm. L 257, de 10 de Octubre de 1996), promulgada y publicitada con notoria anterioridad.

12.- Por consiguiente, aunque aquella mencionada Entidad empresarial promovente y apelante estuviese compelida -lo que tampoco está comprobado a la vista de que existían otros modelos de explotación posibles distintos de aquél "ex-parte" unilateralmente adoptado-, a obtener aquella mencionada autorización ambiental integrada, no puede alegarse por la Representación legal de dicha Razón empresarial denominada "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." que semejante pormenor normativo añeja, comunitaria y previamente establecido era ni novedoso ni imprevisible en cuanto ya se había inclusive publicado aquí dicha Directiva comunitaria que, a la postre, fue objeto en España de retrasada pero obligada trasposición.

13.- Por otra parte, la Disposición Transitoria Primera (LA LEY 21158/2011),¹ (LA LEY 21158/2011) y 2 del Real Decreto-Legislativo núm. 3/11, de 14 de Noviembre (LA LEY 21158/2011) , aprobatorio del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (LA LEY 21158/2011), prescribe que "los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la Normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos", señalándose también que "los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se

regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la Normativa anterior".

14.- Mientras el Art. 111 del Real Decreto-Legislativo núm. 781/86, de 18 de Abril (LA LEY 968/1986), del Texto refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (LA LEY 968/1986), prevé que "las Entidades locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al Ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración, y deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de las prerrogativas establecidas, en su caso, a favor de dichas Entidades", el Art. 98 "ab initio" de aquel harto añejo Real Decreto-Legislativo núm. 2/00, de 16 de Junio (LA LEY 2206/2000) , aprobatorio del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, preveía -por lo que ahora importa-, que "la ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista...".

15.- Además, el Art. 1255 del Código Civil -del que aquel precitado y harto añejo precepto legal era desarrollo en el ámbito contractual- administrativo-, también prevé que "los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público", sin perjuicio de que el Art. 1258 de igual Norma legal civil prescriba que "los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fé, al uso y a la ley", de modo que aquella referida Entidad empresarial promovente y apelante aceptó libre y voluntariamente suscribir aquel singularizado marco tarifario sin manifestar singularizada oposición ni controversia al respecto.

16.- Por consiguiente, resultan desde luego aplicables no sólo las reglas de la buena fé y de los "actos propios" ínsitas -por lo que desde luego atañe a aquella Entidad empresarial-, en los Arts. 7,1 ; 1255 y 1258 del Código Civil , sino aún aquella consolidada línea jurisprudencial apuntada - entre otras muchas-, por aquella Sentencia núm. 198/88, de 24 de Octubre, del Tribunal Constitucional , en cuanto la misma "significa la vinculación del autor de una declaración de voluntad..., al sentido objetivo de la misma y a la imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio", apuntándose en aquellas otras Sentencias de fechas 6 de Junio y 10 de Noviembre de 1992, dictadas por la Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo -a propósito del alcance y significado del Art. 7,1 del Código Civil -, que "se falta a la buena fe cuando se va contra la resultancia de los actos propios; se realiza un acto..., para beneficiarse de su significación -máxime si la misma es cierta y no dudosa cabe ahora incluso añadir-, o se crea una apariencia jurídica para contradecirla después...", de manera que no resultan admisibles los argumentos de aquella Representación legal de dicha Razón empresarial que desconocen su propia y previa voluntad contractual de ofertar otrora aquellos términos de contratación amén de aquellos precios a fin de satisfacer su propio interés empresarial de adjudicarse aquel contrato mixto de obra y concesión de aquel servicio público supramunicipal -pese a conocer su complejidad técnica y aún aleatoriedad de costes ulteriores de explotación e inversiones que le eran inherentes-, de modo que desde luego no resulta aplicable al presente caso aquel añejo tenor del Art. 163 (LA LEY 2206/2000),2 de dicho Real Decreto-Legislativo núm. 2/00, de 16 de Junio , en cuanto preveía que "cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato".

17.- Por consiguiente, se debe desestimar aquel recurso de apelación suscitado por la Representación legal de aquella Razón empresarial denominada "FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." y, por ende, se debe confirmar ahora "ad quem" aquella precedente Sentencia de fecha 7 de Enero del 2013, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 aquí sito y por

la que se le desestimó su impugnación contenciosa contra aquella Resolución de fecha 3 de Noviembre del 2010 -y no 22 de Diciembre de dicho año como erróneamente se referenció en dicho fallo "a quo" adoptado-, dictada por la Junta de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Sierra del Barbanza y por la que se le desestimó su solicitud de compensación económica a fin del restablecimiento del equilibrio económico de aquel contrato administrativo relativo tanto a la ejecución de la obra del Complejo medioambiental de residuos sólidos urbanos, sito en la ladera del Monte Valiña, en la carretera 543, en Lousame (A Coruña), como a la gestión en régimen de concesión del servicio público de gestión de residuos sólidos urbanos y asimilados, suscrito en fecha 21 de Agosto del 2001 en virtud de precedente adjudicación al respecto otorgada mediante Resolución de fecha 30 de Marzo del 2000, adoptada por igual máximo Organismo decisorio de dicho mencionado Ente institucional-supramunicipal.

18.- Así, la manifestación "ad quem" de la tutela judicial efectiva contemplada en el Art. 24,2 de la Constitución -apunta aquella harta añeja Sentencia núm. 50/91, de 11 de Marzo, del Tribunal Constitucional -, se materializa precisamente " *revisando la valoración de los hechos que hicieron tanto la Administración como los Organos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa* ", de modo que cabe desde luego ahora tanto desestimar aquel apelatorio recurso "ad quem" promovido por aquella Representación legal de dicha Razón empresarial como confirmar aquel precedente fallo "a quo" dictado y aquella previa y tardía Resolución administrativo-local en su día impugnada.

19.- No se aprecia pues ni infracción en la apreciación de la prueba ni inmotivación alguna en instancia ya que desde luego aquel fallo "a quo" dictado -en dicción de aquella otra Sentencia de fecha 30 de Octubre del 2009, dictada por igual Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y del todo punto extrapolable al supuesto que ahora nos ocupa-, " *contiene una fundamentación jurídica que cumple suficientemente los requisitos de motivación de las resoluciones judiciales pues lejos de haber dado una respuesta vaga, genérica o inmotivada al caso planteado, lo analiza... La Parte actora podrá no estar de acuerdo con las conclusiones del Tribunal de instancia, pero no puede decir que..., no haya argumentado debidamente su decisión* ".

20.- Por consiguiente, se le han de imponer además las correspondientes costas procesales a dicha mencionada Razón empresarial, con arreglo al criterio del vencimiento "ad quem" al efecto establecido por el Art. 139 (LA LEY 2689/1998),2 de aquella Ley núm. 29/98 , de 13 de Julio, de modo que,

VISTOS: los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación, en nombre de S.M. el Rey,

FALLAMOS

Que procede, de conformidad con el tenor de los Arts. 68,1 b) y 2 ; 70,1 ; 81,1 "ab initio" y 85,9 de dicha Ley núm. 29/98 , de 13 de Julio (LA LEY 2689/1998), tanto desestimar el recurso de apelación promovido por la Representación legal de dicha Entidad empresarial denominada "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A." como confirmar aquella Sentencia de fecha 7 de Enero del 2013, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 aquí sito y por la que se le desestimó a dicha mencionada Razón empresarial su recurso contencioso-administrativo contra aquella Resolución de fecha 3 de Noviembre del 2010 -y no 22 de Diciembre de dicho año como erróneamente se referenció en dicho fallo "a quo" adoptado-, dictada por la Junta de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Sierra del Barbanza y por la que se le desestimó su solicitud de compensación económica a fin del restablecimiento del equilibrio económico de aquel contrato administrativo relativo tanto a la ejecución de la obra del Complejo medioambiental de residuos sólidos urbanos, sito en la ladera del Monte Valiña, en la carretera 543, en Lousame (A Coruña), como a la gestión en régimen de concesión del servicio público de gestión de residuos sólidos urbanos y asimilados, suscrito en fecha 21 de Agosto del 2001 en virtud de precedente adjudicación al respecto otorgada mediante

Resolución de fecha 30 de Marzo del 2000, adoptada por igual máximo Órgano decisorio de dicho mencionado Ente institucional- supramunicipal, al estimarse "a quo" como no-acreditada su rotura, debiéndosele de imponer además las correspondientes costas procesales a dicha mencionada Razón empresarial promovente, apelante y ahora "ad quem" desestimada, con arreglo al criterio del vencimiento apelatorio al efecto establecido por el Art. 139,2 de aquella misma Norma legal procesal contencioso-administrativa anteriormente referenciada.

Notifíquese la presente Sentencia a aquellas aludidas Contrapartes personadas en estas actuaciones y anteriormente referenciadas, significándoseles que, con arreglo al expreso tenor del Art. 86 (LA LEY 2689/1998),1 "a contrario sensu" de dicha Ley núm. 29/98 , de 13 de Julio, no cabe interponer recurso ordinario alguno contra la presente Sentencia.

Además, dedúzcase oportuno testimonio de la presente Sentencia que correrá unido a los presentes autos y deposítase el original en la Secretaría de esta Sala a fin de su llevanza en el correspondiente libro de Sentencias de este Órgano jurisdiccional colegiado aquí radicado conforme al tenor de los Arts. 265 (LA LEY 1694/1985) y 266 de la L.O. núm. 6/85, de 1 de Julio (LA LEY 1694/1985), del Poder Judicial , devolviéndose desde luego las presentes actuaciones a aquel referido Órgano jurisdiccional unipersonal contencioso-administrativo allí sito a sus oportunos y eventuales efectos junto con oportuna copia certificada del presente fallo "ad quem" al respecto recaído.

Así por esta Sentencia se pronuncia, manda y firma.

PUBLICO: Leída y publicada ha sido la presente Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado DON JOSE MANUEL RAMIREZ SINEIRO, a la sazón ponente de las presentes actuaciones en esta Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del T.S.J. de Galicia aquí radcada, habiéndose celebrado al efecto audiencia pública en el día de la fecha de conformidad con el Art. 205 (LA LEY 1694/1985),6 de la L.O. núm. 6/85, de 1 de Julio, del Poder Judicial , de lo que, como titular de la Secretaría de dicho referido Orga **no** jurisdiccional contencioso-administrativo de carácter colegiado, doy fé.